



Convención sobre los Derechos del Niño

Distr. general
18 de junio de 2014
Español
Original: inglés

Comité de los Derechos del Niño 60º período de sesiones

Acta resumida de la 1708ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 5 de junio de 2012, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Zermatten

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes (*continuación*)

Cuarto informe periódico de Australia sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (continuación)

Informe inicial de Australia sobre la aplicación del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

Informe inicial de Australia sobre la aplicación del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

GE.12-43247 (S) 060614 180614



* 1 2 4 3 2 4 7 *

Se ruega reciclar



Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)

Cuarto informe periódico de Australia sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (continuación) (CRC/C/AUS/4; CRC/C/AUS/Q/4 y Add.1; HRI/CORE/AUS/2007)

1. *Por invitación del Presidente, la delegación de Australia toma asiento a la mesa del Comité.*
2. **El Sr. Gastaud** dice que el sistema de justicia juvenil del Estado parte está aquejado de los dos problemas fundamentales que se trataron en detalle en la sesión anterior: la discriminación y la coordinación. Cabe calificarlo de discriminatorio porque se trata a los menores infractores de manera diferente dependiendo del estado federado en el que se encuentren. Además, el tratamiento que reciben viene determinado por la edad de responsabilidad penal en el estado federado en cuestión. Las diferentes edades de responsabilidad penal constituyen un obstáculo para una coordinación eficaz. Pregunta si un menor infractor que comete un delito grave comparece ante un tribunal de menores especializado o ante un tribunal ordinario, y qué sanción se le impone. Asimismo, desea saber si un mecanismo de mediación podría ser una alternativa a los procedimientos judiciales en el caso de las infracciones menos graves, y cómo se presta la asistencia judicial cuando un menor infractor cruza las fronteras de un estado federado tras haber cometido un delito. También desea conocer en qué condiciones se lleva a cabo la privación de libertad de los menores infractores, dado que el Comité ha recibido informaciones de que se efectúa en las mismas dependencias utilizadas para los adultos.
3. **El Sr. Kotrane** observa con pesar que el Gobierno no ha aumentado todavía la edad mínima de responsabilidad penal de los 10 años, a pesar de la recomendación que emitió al respecto el Comité 7 años atrás. Por otra parte, expresa su desacuerdo con la opinión del Gobierno de que es conveniente fijar la edad de responsabilidad penal en los 10 años. La postura del Gobierno es que esta edad refleja los efectos de un mayor acceso a la educación y las tecnologías de la información sobre la capacidad de los niños australianos para distinguir mejor entre el bien y el mal, se ajusta a las expectativas actuales de la sociedad australiana acerca de la responsabilidad penal de los niños y es producto del contexto histórico y cultural singular de la legislación y la sociedad del país. El Sr. Kotrane recuerda que las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores establecen que fijar la edad de responsabilidad penal en un nivel demasiado bajo es inaceptable. También señala a la atención de la delegación la Observación general N° 10 del Comité, que recomienda que la edad mínima de responsabilidad penal se sitúe en los 12 años.
4. Refiriéndose al párrafo 280 del informe periódico, que alude a los jóvenes privados de libertad, el orador pregunta por qué esas estadísticas solo hacen referencia a los jóvenes de edades comprendidas entre 10 y 17 años, y no entre 10 y 18.
5. **El Sr. Madi**, tomando nota de los avances positivos en la esfera de la inmigración, pregunta por qué precisamente la Comisión de Derechos Humanos de Australia sigue preocupada por el número de niños que todavía permanecen retenidos en centros de detención. También desea saber cuánto tiempo se necesita para examinar una solicitud de asilo, cuántas se han presentado en los últimos cinco años, cuántas se han aceptado y qué ocurre cuando se rechaza una solicitud.
6. **La Sra. Aidoo** dice que los avances logrados por el Estado parte en la esfera del desarrollo del niño en la primera infancia son dignos de elogio. Sin embargo, el hecho de que las nuevas iniciativas tiendan a centrarse en los niños de 4 años de edad es motivo de preocupación, dado que la mayor parte del desarrollo cerebral tiene lugar antes de que el

niño cumpla 3 años. Recuerda la importancia de adoptar un enfoque holístico sobre el desarrollo del niño en la primera infancia y de la participación de los padres en ese empeño. Observando que la mayoría de los programas de desarrollo del niño en la primera infancia se llevan a cabo en instituciones privadas, pregunta qué medidas ha adoptado el Estado parte para garantizar el acceso universal a la educación en la primera infancia.

7. La oradora observa con pesar que, pese a ser una sociedad multicultural, la trayectoria del Estado parte en la enseñanza de una segunda lengua no es buena. Pregunta sobre la situación actual de las escuelas en idiomas de las comunidades, dado que en algunos estados federados reciben más fondos que en otros. Pide que se aclare si en 2009 se puso fin a la enseñanza bilingüe para los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Destaca la importancia de permitir que estos se sientan cómodos con su idioma y adquieran habilidades de aprendizaje en su propia lengua antes de proceder a su inmersión en el idioma dominante. También desea conocer el estado actual del plan nacional de educación indígena para el período 2010-2014. Asimismo, observa con interés que el Estado parte ha llevado a cabo estudios destinados a detectar las desigualdades de género que afectan a los niños en las escuelas, y solicita que se le proporcione más información sobre la iniciativa "Chicos con éxito".

8. **La Sra. Nores de García** pregunta cómo está estructurado el programa de apoyo a las familias, quién tiene derecho a sus prestaciones, cuáles son los criterios que hay que cumplir para poder beneficiarse de él y si el programa funciona en todos los estados federados. Además, desea saber de qué manera tiene en cuenta el Gobierno el interés superior del niño al repatriar a los niños refugiados, en particular a los de origen afgano.

9. **La Sra. Herczog** dice que el hecho de que los progenitores que trabajan puedan disfrutar ya de 18 semanas de permiso parental remunerado es un avance en la buena dirección, pero que los hogares que necesitan dos sueldos para sufragar el costo de la vida o las familias monoparentales no podrán subsistir con el salario mínimo nacional. Pregunta si el Gobierno ha previsto ampliar aún más el período de 18 semanas, a la luz de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de amamantar durante seis meses a los recién nacidos. También desea saber de qué forma prevé complementar el Gobierno los ingresos de las familias que no pueden subsistir con el salario mínimo nacional. Le interesaría saber cuántos padres hacen uso del permiso parental remunerado y qué medidas está tomando el Gobierno para alentar a las madres y a los padres a utilizarlo. Pregunta si se informa a los progenitores de las necesidades emocionales de los recién nacidos y si el Gobierno proporciona a los padres que experimentan dificultades el apoyo adecuado. Expresa su preocupación ante la posibilidad de que pueda enviarse a los niños menores de 5 meses a la guardería, tras cumplirse las 18 semanas de permiso parental remunerado, y pide que se aclare cómo prevé dar respuesta a sus necesidades el Gobierno.

10. El hecho de que el sector privado tenga el monopolio de los centros de primera infancia significa que es difícil garantizar la calidad de la atención recibida en ellos. Preocupa también al Comité que el acento puesto en los beneficios pueda hacer que se pase por alto la necesidad de una proporción adecuada entre el número de empleados y el de niños, y de que el personal esté debidamente cualificado.

11. La oradora expresa su preocupación por el excesivo porcentaje de niños indígenas institucionalizados. Pregunta qué medidas se han adoptado para mejorar la evaluación, asignación y supervisión de los cuidadores y qué tipo de mecanismos de denuncia existen para evitar posibles abusos. Dado que un gran número de niños se quedan sin trabajo, sin hogar o comienzan a abusar de sustancias adictivas tras dejar las instituciones que los acogían, la oradora agradecería que se facilitase información sobre los servicios de seguimiento disponibles. También pregunta si las técnicas de mediación se utilizan ampliamente en las escuelas en las que la violencia supone un problema.

12. **La Sra. Lee** dice que el Comité incluyó el problema del abuso de sustancias adictivas en sus observaciones finales anteriores, pero que al parecer se han logrado escasos progresos en la materia. Se pregunta si los programas concebidos por el Gobierno hasta la fecha atacan satisfactoriamente las causas profundas del problema. Desea conocer además los motivos de que el rendimiento académico de los niños indígenas sea inferior a la media.

13. **El Sr. Woolcott** (Australia) dice que el nombramiento de cualquier nuevo Gobierno implica la introducción de nuevas políticas, también en lo referente a la infancia.

14. **El Sr. Manning** (Australia) señala que la legislación destinada a hacer cumplir las disposiciones sobre el empaquetado genérico de los productos del tabaco australianos entrará en vigor el 1 de octubre de 2012 y el 1 de diciembre de 2012 lo hará la relativa a todos los demás productos del tabaco. La iniciativa del empaquetado genérico es una de las medidas adoptadas para reducir el tabaquismo. Otra de las medidas adoptadas ha sido el aumento en un 25% de los impuestos especiales que gravan el tabaco, con el fin de disuadir a los fumadores de adquirir productos del tabaco. También se han aprobado leyes para prohibir la publicidad de los productos del tabaco en Internet. Además, el Gobierno ha puesto en marcha su campaña antitabaco más ambiciosa hasta la fecha, para sensibilizar a la población acerca de los riesgos que entraña para la salud fumar. Existen estudios que demuestran que en ese tipo de campañas dirigidas a adultos, los niños también se benefician indirectamente de un ambiente libre del humo del tabaco. En la actualidad, está prohibido fumar en casi todos los espacios públicos cerrados y la prohibición podría extenderse a otros, como las instalaciones deportivas y los automóviles en los que viajen niños.

15. La industria del tabaco ha tratado de eludir las medidas de control del consumo de ese producto mediante campañas llevadas a cabo en medios sociales y a través del cabildeo político. Por otra parte, ha manifestado su resistencia a la iniciativa del empaquetado genérico emprendiendo acciones judiciales en varias ocasiones. Las solicitudes de información han retrasado aún más la aplicación de la iniciativa.

16. **El Sr. Woolcott** (Australia) dice que el presupuesto nacional para el período 2012-2013 asignará una cantidad sustancialmente mayor a asistencia oficial para el desarrollo. El Gobierno ha incrementado el gasto en esa partida presupuestaria en alrededor del 60% desde 2007-2008 y prevé aumentarla aún más en el futuro. El objetivo primordial del programa de asistencia de Australia es ayudar a las personas a salir de la pobreza, promoviendo y protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos. El programa trabaja en favor de los derechos de los niños, aumentando su acceso a servicios de salud y educación, y velando por la aplicación efectiva de políticas de protección de la infancia. Se espera que para el período 2015-2016, como resultado del programa, se haya vacunado a 10 millones de niños, más de 8,5 millones de personas tengan acceso a agua potable y más de 5 millones, a servicios básicos de saneamiento. Además, el programa tiene como objetivo facilitar el acceso a una enseñanza de calidad a 20 millones de niños y niñas mediante la formación de más docentes y el suministro de material de aprendizaje.

17. **La Sra. Pope** (Australia) señala que, si bien el uso de la detención comunitaria se ha vuelto más generalizado, no es una alternativa a una tramitación rápida de las solicitudes de asilo y a la concesión de visados permanentes. Se ha autorizado la detención comunitaria de más de 4.000 personas, entre ellas casi 1.900 niños. Alrededor de la mitad han recibido ya visados de protección y se les ha ofrecido asistencia para establecerse permanentemente en Australia. Además, se da prioridad a las solicitudes presentadas por niños, en especial los no acompañados.

18. En cuanto a la cuestión de las entrevistas de solicitud de asilo, la oradora dice que los niños que solicitan un visado como parte de una unidad familiar pueden ser entrevistados por separado, sobre todo si hay motivos para pensar que no han presentado la

solicitud de manera voluntaria. Cuando el solicitante principal de un visado es un niño, se realiza de oficio una entrevista. En el caso de los menores no acompañados, la entrevista se realiza en presencia de personal de apoyo externo, que le proporciona al niño apoyo físico y emocional durante todo el proceso de la entrevista. Esos niños también tienen acceso a asistencia jurídica gratuita e independiente durante el proceso de solicitud del visado.

19. En cuanto a las condiciones de vida en los centros de detención comunitaria, los menores no acompañados, en particular, disponen de servicios especializados y de apoyo. El Gobierno alberga a las familias en viviendas completamente equipadas, matricula a los niños en la escuela y sufragando el costo de su educación, así como el de los servicios de salud. Sin embargo, a los adultos en situación de detención comunitaria no se les permite trabajar, pero el Gobierno les anima a participar en actividades alternativas, como el voluntariado en las escuelas, la práctica del deporte o las clases de aprendizaje del inglés. Los menores no acompañados disponen de atención especializada las 24 horas del día, así como de acceso al sistema educativo y a los servicios médicos y de salud mental. Cuando se les concede un visado, a estos menores no acompañados se les ofrece ayuda para trasladarse a un alojamiento adecuado. El Gobierno está actualmente probando nuevas modalidades de convivencia para los menores no acompañados de más edad, con miras a facilitarles el acceso a una vivienda estable, a la enseñanza y al empleo.

20. El Ministro de Inmigración es el tutor oficial de los menores no acompañados. En la práctica, la tutela se delega en las autoridades federales y territoriales encargadas del bienestar social y los altos funcionarios de inmigración. El Gobierno es consciente de las preocupaciones que despierta el aparente conflicto de intereses por el hecho de que el Ministro sea, por un lado, el tutor oficial de los menores no acompañados y por otro, el encargado de tomar las decisiones sobre las cuestiones relacionadas con los visados y las detenciones.

21. **La Sra. Maurás Pérez** (Relatora para el país), observando que se da prioridad a los niños y, en especial, a los menores no acompañados en el proceso de solicitud de visado, pide que se aclare cuánto tiempo se tarda en concederles un visado de protección.

22. **El Presidente** no entiende cómo puede ser el tutor oficial de los menores no acompañados el Ministro de Inmigración y Ciudadanía cuando el objetivo principal de su Ministerio no es defender los derechos de los niños. El Estado parte debe considerar la posibilidad de poner remedio a esa situación.

23. **La Sra. Pope** (Australia), en respuesta a la preocupación expresada acerca de la doble función del Departamento de Inmigración y Ciudadanía en relación con los niños inmigrantes no acompañados, dice que el Departamento considera el bienestar de los niños como una responsabilidad primordial tan importante como el control de fronteras, el mantenimiento del orden público y la gestión de la inmigración. La creación de la División de Programas Comunitarios y de la Infancia demuestra la importancia que se le concede y el programa de detención comunitaria, desarrollado específicamente para dar respuesta a las necesidades de los niños inmigrantes, ha recibido comentarios muy favorables de la Comisión de Derechos Humanos de Australia, el Ombudsman para la Inmigración y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La naturaleza del trabajo del Departamento sobre el terreno, que está centrado en los niños y sometido a un escrutinio minucioso y permanente, desmiente, por tanto, la supuesta existencia de un conflicto de intereses. Además, varios expertos en la materia han señalado que la transferencia de las responsabilidades de tutela del Departamento a otro Ministerio no aportaría ventajas significativas.

24. La oradora no dispone de estadísticas sobre los plazos medios para la tramitación de las solicitudes de visado, pero reconoce que podrían ser más cortos. Señala que el principal obstáculo radica en la dificultad para identificar a los inmigrantes indocumentados. Con

todo, las autoridades velan por que los niños no permanezcan en centros de detención más tiempo del indispensable, y se les traslada a instalaciones de detención comunitaria tan pronto como se completan los procedimientos necesarios de identificación, las evaluaciones de riesgos y los controles obligatorios de seguridad y de salud, que en general tardan menos de tres meses.

25. El número de inmigrantes nuevos llegados por mar, aproximadamente equivalente al número de solicitudes de visado recibidas, ascendió a 2.726 en 2009, a 6.614 en 2010, a 4.565 en 2011 y a 3.700 en los 5 primeros meses de 2012. Alrededor de la mitad de los solicitantes en cada período recibieron visados. Lamentablemente, no se dispone de cifras sobre los que entran por vía aérea ni de un desglose que indique el número de adultos y de niños.

26. Las personas con discapacidad pueden emigrar a Australia, y así lo hacen. Representan una valiosa contribución económica y social para el país, pero tienen que cumplir ciertos requisitos sanitarios legalmente establecidos. El propósito de estas exigencias es proteger de los riesgos para la salud pública y la seguridad, contener el gasto público y salvaguardar el acceso a unos servicios ya sobrecargados. El padecer una discapacidad no significa necesariamente que no se cumplan esos requisitos, aunque el visado puede denegarse si el funcionario que evalúa la solicitud considera que la condición del solicitante hace probable que ocasione costos sanitarios y comunitarios significativos. Sin embargo, una decisión negativa puede no aplicarse en determinadas circunstancias, sobre todo cuando existan razones humanitarias convincentes.

27. **El Sr. Cardona Llorens** dice que la decisión de no conceder a un médico alemán un permiso para residir permanentemente en Australia porque su hijo tenía síndrome de Down es difícil de comprender, ya que no comporta riesgos de salud. En su opinión, esa negativa constituye una discriminación.

28. **La Sra. Pope** (Australia) dice que, lamentablemente, no dispone de información al respecto y que esto le impide realizar cualquier comentario sobre el caso.

29. **La Sra. McKenzie** (Australia) dice que el Gobierno proporciona un importante apoyo financiero a las familias con niños a través del sistema de subsidios familiares. Esta fórmula asistencial de seguridad social está dirigida a una base amplia de familias que cumplan determinados requisitos. El sistema combina una evaluación de la situación financiera de las familias con una fiscalidad directa basada en tipos impositivos altamente progresivos. Recientemente se han introducido prestaciones como la licencia parental remunerada, el aumento de las ayudas para las familias con adolescentes que asisten a la escuela y la cofinanciación de los gastos de guardería. En el caso de las personas con ingresos bajos, dichas prestaciones se complementan con ayudas en el precio que pagan por los servicios públicos y de salud y transporte, y con subsidios para pagar el alquiler. Además, todos los ciudadanos tienen acceso a un sistema universal de atención de la salud altamente subvencionado, a la enseñanza gratuita, a la licencia de enfermedad remunerada y a un salario mínimo elevado.

30. Unos 2 millones de familias se benefician actualmente de la Desgravación Familiar, cuyo objetivo es hacer más llevadero el esfuerzo económico de criar a los hijos. En 2013, más de 1 millón percibirá también la nueva Bonificación por Niños en Edad Escolar, que asciende a 410 dólares australianos al año por cada niño matriculado en la escuela primaria y a 820 dólares por cada hijo inscrito en la escuela secundaria. Entre otras ayudas que se prevé introducir en 2013 cabe señalar las Medidas de Ayuda a los Hogares del Plan para un Futuro basado en la Energía Limpia, diseñadas para compensar el aumento en el costo de vida asociado con la introducción de un impuesto que grava las emisiones de gases de efecto invernadero, y el Complemento para las Familias con una Única Fuente de Ingresos, que proporciona una desgravación fiscal de hasta 300 dólares australianos al año. Además, se prevé que una importante reforma estructural del sistema tributario que se aplicará en

julio 2012 reduzca la carga fiscal para todos los contribuyentes con ingresos anuales inferiores a 80.000 dólares australianos (alrededor del 60% de los contribuyentes) y eleve el umbral de la exención de impuestos hasta los 18.200 dólares.

31. **El Sr. Ayres** (Australia) dice que todas las personas desempleadas tienen a su disposición un conjunto de medidas de asistencia y apoyo amplio y bien financiado a través de la red nacional de servicios de empleo, Job Services Australia, que cuenta con unas 2.000 oficinas en todo el país. Se presta especial atención a los solicitantes de empleo jóvenes y se han creado servicios específicos que se centran en atender a grupos especialmente necesitados, por ejemplo madres y padres jóvenes desempleados que viven en comunidades desfavorecidas. En los últimos presupuestos también se han asignado 225 millones de dólares a la financiación durante 4 años del Programa de Subsidios de Gastos de Guardería para Facilitar el Acceso a la Formación, la Enseñanza y el Empleo. El programa contribuirá sobre todo a que los adultos en las familias monoparentales puedan hacer frente a los gastos de guardería de sus hijos y tengan la oportunidad de realizar programas de formación y cursar estudios que les permitan incorporarse al mercado laboral una vez que sus hijos tengan más edad y sean más independientes.

32. **La Sra. Wijemanne** (Relatora para el país), pasando a la cuestión de la salud mental de los niños, dice que, en vista de los inquietantes informes sobre casos de mala gestión y uso excesivo de medicamentos psicotrópicos en niños de no más de 4 años de edad diagnosticados con hiperactividad y trastornos de déficit de atención, desea saber si los efectos de esos medicamentos se han investigado debidamente, si su uso se controla adecuadamente y si se ofrecen terapias conductuales como alternativa. También solicita información sobre los servicios de asesoramiento y ayuda dirigidos a jóvenes que tienen problemas emocionales, incluidos los que están planteándose el suicidio, y sobre las medidas destinadas a que los niños especialmente vulnerables tengan acceso a esos servicios. Pide también a la delegación que proporcione más detalles acerca de los servicios educativos y de asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva dirigidos a los jóvenes, acerca de los programas destinados a evitar el abuso de sustancias adictivas o a ayudar a los consumidores de estas a que dejen de utilizarlas, y acerca de cualquier programa escolar no formal, incluidos los programas básicos de alfabetización y aritmética elemental, que se hayan creado para los jóvenes que han abandonado la escuela y cuya reinserción en el sistema educativo formal no es posible. Por último, observando que según un estudio reciente dos tercios de las niñas afirman haber sido víctimas de algún tipo de acoso y alrededor del 20% señalan haberlo sufrido en línea, la oradora se pregunta si ese fenómeno se percibe como un problema social importante y, si es así, de qué manera se está luchando contra él.

33. **El Sr. Manning** (Australia), pasando a la cuestión de los castigos corporales, dice que aunque la imposición de un "castigo razonable" por un progenitor es legal en Australia, las disposiciones legislativas o normativas prohíben el castigo corporal en todas las instituciones del sector público, como las escuelas, los centros de asistencia residencial y las instituciones de justicia juvenil, y el Gobierno no apoya en modo alguno su uso. Aunque en un reducido número de estados el castigo corporal no está prohibido expresamente en las escuelas privadas, el Gobierno solo tiene conocimiento de que todavía se practique en un par de ellas.

34. Cuando un castigo razonable se convierte en una agresión, teniendo en cuenta la capacidad de razonamiento del niño, el método de castigo utilizado y el daño causado, continúa siendo una cuestión debatida. Sin embargo, un estudio de 200 casos de violencia contra niños llevado a cabo en Queensland en 2008 puso de manifiesto que el argumento del "castigo razonable" no sirve como resquicio legal para evitar el procesamiento. Un estudio similar realizado en Nueva Gales del Sur en 2010 arrojó conclusiones parecidas. Además, la definición de castigo razonable es restrictiva, y si existen indicios de que un castigo se aparta de ella, las autoridades de protección de menores llevan a cabo necesariamente una investigación y enjuiciamiento.

35. **La Sra. Maurás Pérez** dice que, si bien la justificación aportada para la ausencia de una prohibición absoluta del castigo corporal puede parecer razonable, la tasa relativamente elevada de violencia contra las mujeres en Australia parece indicar la existencia de una relación entre la aceptación del castigo corporal contra los niños, incluso con salvedades, y una mayor incidencia de la violencia doméstica entre los adultos. Invita al Estado parte a reflexionar sobre ese vínculo y sobre la manera en que una postura más firme en lo referente al castigo corporal podría ayudar a reducir la violencia en general.

36. La oradora invita también a la delegación que aclare la relación entre el Plan de Acción Nacional para Reducir la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos, que se debatió en una sesión anterior, y el Marco Nacional de Protección de los Niños de Australia. También desea saber si el plan anterior incluía medidas para hacer frente a las situaciones en las que las mujeres no son capaces de proteger a sus hijos de los actos de violencia o son ellas mismas quienes los perpetrar.

37. **El Sr. Manning** (Australia) dice que los programas para el fomento de las prácticas positivas en la crianza de los hijos se promueven activamente y son un instrumento importante para proteger a los niños de los castigos corporales. También se han habilitado servicios de asistencia telefónica.

38. **El Sr. Ayres** (Australia) señala que los programas educativos diseñados para aumentar el nivel de conocimientos de los padres sobre el desarrollo del niño en la primera infancia y los efectos de la violencia son responsabilidad del Consejo Ministerial para la Educación, el Desarrollo del Niño en la Primera Infancia y Asuntos de la Juventud, y que en los programas escolares de lucha contra el acoso se anima a los niños a no callarse y actuar cuando tengan preocupaciones sobre la violencia doméstica.

39. **La Sra. McKenzie** (Australia) dice que los dos programas mencionados por la Sra. Maurás Pérez son complementarios, dado que la violencia doméstica se considera un factor importante en el maltrato y el abandono de los niños, y que una mayor colaboración con las mujeres que han sido víctimas de violencia debería contribuir a reducir el sufrimiento entre los niños.

40. **El Sr. Ayres** (Australia), pasando a la cuestión de los niños con discapacidad y su educación, dice que cada estado, territorio o servicio de educación utiliza procedimientos diferentes en relación con la elegibilidad, la evaluación y la identificación, y que no existe un criterio nacional uniforme. No obstante, puesto que los datos a nivel nacional para el año 2008 indican que el 4,4% de las escuelas de Australia eran escuelas especiales y que el 8,8% de los escolares o bien habían declarado padecer, o se había considerado que padecían algún tipo de discapacidad, se puede suponer, a falta de estadísticas precisas, que una proporción importante de los niños con discapacidad asiste a escuelas ordinarias. Además, el plan de estudios de la educación nacional es el mismo para todos los niños, independientemente de si sufren alguna discapacidad o no, aunque la forma de impartirlo puede ajustarse a las circunstancias y capacidades individuales, para lo cual se dispone de varias fuentes de financiación.

41. Como parte de una reforma nacional más amplia de la prestación de asistencia financiera y apoyo a las personas con discapacidad en general, los criterios en materia de discapacidad en la esfera de la educación han sido objeto de una importante revisión recientemente, con el objetivo de aumentar la coherencia y la equidad en la prestación de servicios; el Parlamento está examinando actualmente el informe resultante.

42. **La Sra. McKenzie** (Australia) dice que el Consejo de Gobiernos Australianos ha elaborado un plan decenal para reformar el sistema de apoyo y cuidados para las personas con discapacidad que se centrará en las esferas de resultados principales siguientes: la inclusividad y accesibilidad de las comunidades; la protección de los derechos a través de la justicia y la legislación; la seguridad económica; el apoyo personal y comunitario; el

aprendizaje y el desarrollo de habilidades; y la salud y el bienestar. La iniciativa "Un Mejor Comienzo para los Niños con Discapacidad" proporciona hasta un máximo de 12.000 dólares australianos para apoyar la intervención temprana en niños con parálisis cerebral, síndrome de Down, síndrome de cromosoma X frágil y discapacidades visuales y auditivas. Existe también un programa similar para los niños que padecen autismo. Se prevé que las reformas incluyan también la creación de un sistema nacional de seguro de discapacidad que dé respuesta a las necesidades de cada persona. Se espera que a mediados de 2013 el número de beneficiarios ascienda a 10.000 personas, y en 2014, a 20.000.

43. **El Sr. Cardona Llorens** señala que la cifra del 8,8%, citada como porcentaje de escolares con discapacidad, parece bastante alta. Se pregunta si es posible que algunos de esos niños tengan necesidades educativas especiales, pero no necesariamente sufran una discapacidad. Desea saber cuántos niños hay matriculados en los 415 centros de educación especial en el país, a cuántos niños con discapacidad se escolariza en escuelas ordinarias y cuántos de ellos asisten a clases especiales dentro de los centros de enseñanza ordinarios. Las observaciones de la delegación sobre un proceso estandarizado para decidir dónde debe escolarizarse a los niños con discapacidad no se ajustan al artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que los niños con discapacidad no deben quedar excluidos del sistema general de educación por motivos de discapacidad. Pregunta si el Gobierno se plantearía la posibilidad de cambiar su postura al respecto.

44. **El Sr. Ayres** (Australia) dice que la Oficina de Estadística de Australia lleva trabajando desde 2009 para perfeccionar sus encuestas y para que estas permitan recabar datos desglosados sobre las personas con discapacidad, aunque aún cabe mejorarlas. Está en vigor una política nacional general que fomenta la integración de los niños con discapacidad en el sistema de enseñanza ordinaria siempre que sea posible; lo que posibilita que la escolarización de los niños con discapacidad se lleve a cabo con más frecuencia en centros ordinarios que en escuelas especiales.

45. **El Sr. Woolcott** (Australia) señala que el programa de asistencia australiano (Australian Aid) ha diseñado la estrategia "Desarrollo para todos: hacia un programa de asistencia australiano que incluya a las personas con discapacidad, 2009-2014", para velar por que las personas con discapacidad se beneficien de los programas de desarrollo del Gobierno.

46. **El Sr. Manning** (Australia) dice que el Gobierno reconoce el derecho de las personas con discapacidad a conservar su capacidad reproductiva y que la esterilización de los niños con discapacidad se autoriza solo como último recurso, después de examinar debidamente cuál es el interés superior del niño. El consentimiento de los padres solo puede servir como base para proceder a la esterilización cuando esta sea consecuencia de un procedimiento quirúrgico para el tratamiento de una enfermedad. De lo contrario, se requiere la autorización de un órgano jurisdiccional. El Gobierno es consciente de la preocupación que genera el tema y continúa colaborando con los gobiernos estatales y territoriales para mejorar las leyes y prácticas conexas. Aunque no son exhaustivos, los datos disponibles indican que el número de esas esterilizaciones es bastante reducido. La Comisión de Derechos Humanos de Australia sigue recabando información de los distintos órganos jurisdiccionales.

Se suspende la sesión a las 11.40 horas y se reanuda a las 11.50 horas.

47. **El Sr. Ayres** (Australia) señala que el Organismo Australiano encargado de la Elaboración de los Programas de Estudios, su Evaluación y la Presentación de Informes al respecto ha publicado un documento en el que se evaluaba el programa de estudios de salud y educación física. Los niños con problemas de salud tienen a su disposición una serie de programas de apoyo, por ejemplo un programa piloto para ayudar a los profesionales que

trabajan en el ámbito de la atención infantil a detectar los primeros signos de problemas de salud mental entre los niños pequeños. La aplicación de un amplio conjunto de estrategias garantiza la salud, la educación y el bienestar de los niños de todas las edades: la Estrategia Nacional de Desarrollo del Niño en la Primera Infancia abarca los aspectos relativos a los niños de entre 0 y 8 años, y la Declaración de Melbourne sobre las Metas Educativas para los Jóvenes Australianos, los referentes a los niños en edad escolar. Todas las escuelas proporcionan servicios de asesoramiento, entre otros, sobre temas como la salud sexual y la prevención del suicidio.

48. **La Sra. McKenzie** (Australia) explica que el Gobierno está elaborando una guía decenal en materia de salud mental y que ha creado la Comisión Nacional de Salud Mental para supervisar su aplicación e informar a la comunidad al respecto. En 2011, se dedicaron un total de 4 millones de dólares australianos a la iniciativa de salud mental “Los Niños Importan”, dirigida a alumnos de primaria, y 6 millones al programa “La Mente Importa”, cuyos destinatarios son los estudiantes de secundaria. Headspace, la fundación nacional para la salud mental de los jóvenes, recibió 200 millones de dólares de financiación durante los pasados 5 años y su objetivo es establecer 90 centros por todo el país hasta 2015. Más del 96% de los jóvenes que han utilizado los servicios de Headspace dicen que les han ayudado. Australia también cuenta con una serie de servicios de prevención e intervención temprana en casos de psicosis, servicios de apoyo a las familias en materia de la salud mental y servicios mejorados para la prevención del suicidio.

49. **La Sra. Davie** (Australia) dice que, en aras de fomentar la lactancia materna, el Gobierno ha firmado un acuerdo con los fabricantes de sucedáneos de la leche materna según el cual no se promoverán esos productos en el sistema de atención de la salud. En 2011, se modificó la Ley de Lucha contra la Discriminación Sexual para incluir la lactancia materna como motivo ilegal de discriminación en el lugar de trabajo y en los espacios públicos.

50. **El Sr. Ayres** (Australia) dice que el Gobierno reconoce la importancia de educar a los niños sobre las enfermedades de transmisión sexual y su prevención. Se están aplicando una serie de iniciativas y programas en ese sentido, sobre todo a nivel estatal y territorial.

51. **El Presidente** pide a la delegación que proporcione información sobre el consumo de drogas y alcohol entre los niños y jóvenes.

52. **La Sra. McKenzie** (Australia) dice que la Iniciativa para un Futuro más Sólido en el Territorio del Norte es un plan comunitario a largo plazo centrado principalmente en un consumo más responsable del alcohol. En Australia Central se llevan a cabo iniciativas similares para combatir la inhalación de gasolina.

53. **El Sr. Woolcott** (Australia) dice que el objetivo de la Campaña Nacional de Lucha contra las Drogas es disuadir a los jóvenes del consumo de drogas ilegales, informándoles acerca de sus consecuencias negativas. La campaña se centra actualmente en el éxtasis, en vista de su popularidad entre las personas de 15 a 21 años.

54. **El Sr. Ayres** (Australia) señala que, a nivel nacional, el desarrollo y la educación del niño en la primera infancia ya se incluyen en la misma cartera, siguiendo las recomendaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Si bien el Gobierno está promoviendo intensamente el acceso universal a la educación preescolar en el año anterior al comienzo de la escuela, no es esa su única prioridad y, de hecho, las iniciativas en ese sentido representan un pequeño porcentaje de sus gastos totales en educación y cuidados en la primera infancia.

55. El Plan de Acción Nacional para la Educación de los Indígenas es una estrategia amplia y detallada que se aplica actualmente con vistas a mejorar los resultados de los estudiantes indígenas. Una de las medidas que forman parte del plan es averiguar qué

escuelas cuentan con un número significativo de alumnos indígenas, para poder dar una mejor respuesta a las necesidades de esos estudiantes. El Gobierno del Territorio del Norte está examinando actualmente la política de impartir cuatro horas diarias de clases en inglés. La calidad de la enseñanza en el Territorio del Norte y el acceso a ella son cuestiones altamente prioritarias para el Gobierno, como demuestra la inversión en los próximos diez años de 3.500 millones de dólares australianos en la Iniciativa para un Futuro más Sólido en el Territorio del Norte. Las tasas de escolarización preescolar han mejorado y el objetivo es que en 2013 el 95% de los niños de esa edad estén escolarizados. Se han observado resultados positivos en una serie de programas comunitarios destinados a fomentar la asistencia a la escuela y se continuará dedicando recursos a esas iniciativas.

56. **El Presidente** pide más información acerca de la existencia de mecanismos de resolución de conflictos entre compañeros que se apliquen para luchar contra el acoso escolar.

57. **El Sr. Ayres** (Australia) señala que se ha llevado a cabo una iniciativa titulada "¡Acoso, de ninguna manera!" para informar a los estudiantes, padres y docentes acerca de los servicios de apoyo disponibles a través de Internet, de las redes sociales y de las aplicaciones para teléfonos inteligentes, que insiste sobre todo en la intervención temprana y la reconciliación. Como parte de esa iniciativa, el día 16 de marzo se celebró el Día Nacional de Acción contra el Acoso y la Violencia.

58. **La Sra. Herczog** pregunta de qué modo se enfrenta el Gobierno a las causas de fondo del acoso y qué se hace con esos menores infractores, dado que a menudo son jóvenes con problemas que han sufrido la violencia ellos mismos. Se pregunta si podría haber una conexión entre el castigo corporal y el acoso.

59. **El Sr. Ayres** (Australia) dice que no tiene constancia de la existencia de datos que indiquen una mayor incidencia del acoso escolar en las escuelas en que se utiliza el castigo corporal. La campaña "¡Acoso, de ninguna manera!" tiene como objetivo inculcar el respeto hacia los demás, enseñar a los niños que la violencia no es una forma válida de resolver los conflictos, y recordar a los docentes y los padres que, como modelos de conducta que son, deben abstenerse de comportamientos inadecuados.

60. Los docentes y consejeros escolares no se limitan a reprender a los acosadores, sino que están perfectamente capacitados para detectar los signos pueden indicar la existencia de un problema mucho mayor. El mecanismo para hacer frente al acoso ofrece una amplia gama de respuestas posibles, según cuáles sean las necesidades individuales de cada caso y concede especial importancia a la reconciliación y la justicia restaurativa.

61. **El Sr. Manning** (Australia) dice que la edad de responsabilidad penal es de 10 años en todas las jurisdicciones, aunque todas ellas aplican una cláusula de presunción refutable en virtud de la cual es la fiscalía la que debe demostrar que el niño comprendía la gravedad de sus acciones en el momento de la infracción. Así, los niños de 10 a 14 años no se consideran penalmente responsables de manera automática. A pesar de que las opiniones al respecto en el mundo académico varían, una de las posturas es que en la actualidad los niños tienen quizás un mejor conocimiento del mundo que les rodea, que su capacidad para evaluar las consecuencias de sus acciones es mayor y que, por tanto, es razonable mantener la edad actual de responsabilidad penal. La extradición de una jurisdicción interna a otra es posible. Aunque todas las jurisdicciones cuentan con tribunales de menores, se considera que el enjuiciamiento y la privación de libertad son un último recurso, y se prefieren la rehabilitación y el trabajo comunitario, en particular cuando se trata de infracciones de menor importancia.

62. **La Sra. McKenzie** (Australia) dice que se reconoce que los menores infractores con frecuencia han salido del sistema de protección de la infancia. Para hacer frente a ese problema, se están estableciendo normas, con la participación de los niños, para regular las

modalidades alternativas de cuidado. A lo largo del año próximo se pondrán en marcha programas para ayudar a los niños acogidos en esas modalidades alternativas a hacerse independientes, ya sea a través de la educación o del empleo.

63. **El Sr. Manning** (Australia) señala que todos los estados y territorios de Australia han creado tribunales de menores y centros de detención separados de los de los adultos. La privación de libertad de los jóvenes infractores se realiza en dependencias separadas de las de los adultos como mínimo hasta la edad de 18 años, excepto en Queensland, donde la segregación puede terminar ya a los 17 años. Una vez que se cumplen los 18 años pueden ser trasladados a un centro para adultos, pero es más frecuente que se espere hasta que alcancen los 21 años. En raras ocasiones, cuando los menores de 16 a 18 años ponen en peligro con su comportamiento a otros presos, pueden ser enviados a un centro para adultos en el que, no obstante, viven separados de los reclusos mayores de edad. Como consecuencia de una investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Territorio de la Capital Australiana sobre las condiciones del centro juvenil de Canberra se han introducido algunos ajustes en el sistema.

64. **El Presidente** pregunta si un niño de 13 años que haya sido considerado penalmente responsable de un delito grave puede ser privado de libertad.

65. **El Sr. Manning** (Australia) dice que si, después de la aplicación de la cláusula de presunción refutable, a un menor de entre 10 y 14 años se le considera penalmente responsable, es enjuiciado y declarado culpable, puede ser encarcelado.

Informe inicial de Australia sobre la aplicación del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (CRC/C/OPSC/AUS/1; CRC/C/OPSC/AUS/Q/1 y Add.1)

66. **El Sr. Guráñ** (Relator para el país respecto del Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía) pregunta si el Protocolo facultativo se incluye en los programas de estudio en la misma medida que la Convención; qué tipo de formación sobre el Protocolo se imparte a los profesionales que trabajan con niños; y qué progresos se han logrado en la sensibilización de las víctimas y grupos vulnerables. Refiriéndose a la falta de datos a nivel federal, pregunta si se están tomando medidas para agrupar los datos estatales y territoriales con el fin de facilitar la comparación. También desea saber si la estrategia australiana de lucha contra la trata de personas engloba todos los tipos de trata y a todas las víctimas. Expresa su preocupación por el hecho de que la legislación australiana varía de unos estados y territorios a otros y pregunta si a los niños involucrados en la prostitución se les considera víctimas o infractores. Dado que Australia asimila la trata con la esclavitud, pregunta si la definición de esclavitud engloba todas las formas de trata de personas, incluido el tráfico de órganos. Solicita a la delegación que proporcione información actualizada sobre el abuso sexual en las comunidades aborígenes y que explique cuáles son las estrategias y estándares de servicio para las víctimas de zonas remotas. ¿Se ha habilitado una línea telefónica de asistencia dirigida a los niños que son víctimas de esos delitos? Encomia al Estado parte por los progresos realizados en la esfera del turismo sexual, especialmente en lo referente a su prevención y tipificación, y pregunta qué medidas se están adoptando para hacer frente al turismo sexual dentro de la propia Australia.

67. **El Sr. Kotrane**, observando que la edad de consentimiento sexual es de 16 años, pregunta si los menores de edad de entre 16 y 18 años pueden participar en actividades relacionadas con la prostitución y la pornografía, y si dejan de estar protegidos por la ley al superar la edad de consentimiento sexual. Solicita información adicional sobre el modo en que define el Estado parte la venta de niños y, en concreto, si considera que al obligar a un niño al trabajo forzoso o al facilitar la adopción ilegal se incurre en ese delito. Pregunta

también sobre la tipificación de los distintos tipos de material pornográfico. Asimismo, sería útil que el Estado parte proporcionase aclaraciones sobre su ejercicio de la jurisdicción extraterritorial. Acoge con agrado el Reglamento de Extradición de 2006, basado en el Protocolo facultativo, y pregunta si se ha aplicado en algún caso concreto.

68. **El Sr. Koompraphant** pregunta si la posesión de pornografía infantil es un delito en el Estado parte; cómo descubren las autoridades a niños víctimas de los delitos recogidos en el Protocolo facultativo; si se adoptan medidas específicas dirigidas a los niños especialmente vulnerables (por ejemplo: niños fugados del hogar, niños de la calle y niños sin hogar); qué se hace para proteger a los niños indígenas contra la explotación sexual y para ayudar a los que la han sufrido; qué medidas se toman cuando un niño víctima de este delito no puede testificar; y de qué manera se facilita la reintegración familiar de los niños vulnerables y de los que hayan sido víctimas de estos delitos.

69. **El Sr. Madi** celebra los diversos procedimientos, disposiciones legislativas y cursos de formación destinados a luchar contra el turismo sexual, pero pregunta si las condenas por delitos cometidos fuera del país incluyen una compensación para la víctima extranjera.

70. **La Sra. Wijemanne** pregunta qué medidas se están adoptando (si es que se está adoptando alguna) para luchar contra el fenómeno nuevo de la captación de niños por Internet con fines sexuales y, dado que la mayor parte de la pornografía infantil disponible en el Estado parte es importada, de qué manera se trata de evitar que esos materiales entren en el país. Encomia al Estado parte por su amplia legislación en materia de turismo sexual y por su activa persecución de los turistas sexuales que abusan de niños y pregunta cómo se vigila a esos delincuentes y a los potenciales delincuentes.

71. **La Sra. Sandberg** encomia al Estado parte por su nivel de su asistencia oficial para el desarrollo y pregunta si la adopción de medidas para eliminar los delitos que abarca el Protocolo facultativo es una condición para recibir la asistencia para el desarrollo que proporciona Australia.

72. **La Sra. Nores de García**, haciendo referencia a los casos de niñas de las comunidades aborígenes a las que se les diagnostican enfermedades de transmisión sexual a edades tan tempranas como los 5 años, pregunta qué medidas se están aplicando para luchar contra el abuso sexual en esas comunidades. También desea saber cuánto costaría eliminar las tasas que se cobran por inscribir a los recién nacidos en el registro.

Informe inicial de Australia sobre la aplicación del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (CRC/C/OPAC/AUS/1; CRC/C/OPAC/AUS/Q/1 y Add.1)

73. **El Sr. Pollar** (Relator para el país respecto del Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados) pregunta si en la elaboración del informe se ha consultado con los niños. A pesar de las recientes modificaciones del Código Penal del Commonwealth, pregunta si la participación en conflictos armados de los menores de 18 años está tipificada expresamente como delito y si las disposiciones que prohíben el reclutamiento por las Fuerzas Armadas de menores de 18 años son válidas tanto en tiempo de paz como de guerra. Solicita más detalles sobre los procedimientos de reclutamiento y sobre la cantidad de información que se proporciona a los reclutas potenciales y a sus padres. Pide a la delegación que explique el hecho de que la Normativa de Defensa establece medidas para garantizar que los menores no participen en hostilidades, pero únicamente cuando esto afecte negativamente a la ejecución de las operaciones. El Comité ha tenido conocimiento de que en las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Australia en Timor-Leste participaron menores. En vista de ello, pregunta como define el Estado parte "participación directa" y solicita que la delegación proporcione datos sobre el despliegue de menores de edad desde 2009. Se pregunta si el Gobierno tiene la intención de revisar su

legislación y sus políticas en materia de despliegue de menores de edad, para garantizar el pleno cumplimiento del artículo 1 del Protocolo facultativo. Por último, refiriéndose al párrafo 30 del informe, pide a la delegación que explique cuál es la postura del Estado parte en cuanto al reclutamiento obligatorio en relación con el artículo 2 del Protocolo facultativo.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.